

Mesa 1. Las prohibiciones del discurso del odio: ¿una amenaza para la libertad de expresión?

Moderadora: Esther Vera, directora del diario Ara

Ponentes: Eric Heinze, profesor de la Univ. Queen Mary de Londres; Olga Jubany, profesora de la Univ. de Barcelona; y Gavin Phillipson, profesor de la Univ. de Durham.

Gavin Phillipson comenzó su intervención recordando que para desarrollar este tipo de legislación contra el discurso del odio, se ha de tener claro el objetivo para el que se promulga, y alertó de que estas legislaciones pueden llegar a ser utilizadas contra las minorías a las que aspiraban a proteger, y pueden ser una fuente de discriminación al proteger a unos colectivos y no a otros.

A juicio de Phillipson, la legislación contra los discursos de odio debería poner el foco en el discurso más peligroso: las manifestaciones que deshumanizan a colectivos, las expresiones amenazantes o incitadoras de la violencia, y la afirmación de hechos falsos que son gravemente dañinos para la reputación de ciertos colectivos. Por contra, Phillipson manifestó su oposición a la prohibición de los discursos contra religiones en sí mismas. Las leyes contra el discurso del odio deberían proteger a las personas, no sus creencias.



También se posicionó contra la prohibición de declaraciones religiosas que condenen por inmorales ciertas prácticas sexuales. Las amenazas “divinas” al “fuego eterno” no deben ser consideradas por un estado laico.



Olga Jubany presentó parte de los resultados del proyecto internacional de investigación PRISM, *Preventing Redressing and Inhibiting Hate Speech in New Media*, que tenía como objetivo conocer las diferentes maneras en las que la gente experimenta el discurso de odio racista, con una metodología antropológica.

Jubany hizo especial énfasis en las consecuencias del discurso del odio, en el dolor profundo que provoca, un daño que es constante y acumulativo, y que, al ser la razón de las agresiones permanente (el color de piel, la religión, etc.), conduce

incluso al deseo de no ser identificados como miembros del colectivo al que pertenecen.

Jubany también destacó entre las conclusiones del proyecto, la normalización en el padecimiento del discurso del odio y la sensación de inevitabilidad entre las víctimas, que tienen como resultado que apenas se denuncien los hechos, ni a las autoridades judiciales ni tan siquiera a las operadoras de redes sociales.

Eric Heinze, por su parte, expuso lo que denominó como modelo democrático de libertad de expresión. Para Heinze, la libertad de expresión es lo que hace a un estado democrático, y no puede ser regulada como cualquier otro asunto estatal. Por ello, se opone a las leyes contra el discurso del odio, al menos, en las democracias duraderas, estables y prósperas.



Esto no significa que defienda una libertad de expresión absoluta. Las amenazas, el acoso, etc. han de ser criminalizados. Lo que Heinze defiende es la idea de que nadie puede ser excluido del discurso público por erróneas que sean sus opiniones. Tampoco defiende un estado neutral. Al contrario, para Heinze, el estado ha de promover campañas antidiscriminación, educación en la diversidad, leyes anti-discriminación, etc. Pero no debería castigar a nadie por lo que diga.

En el **debate**, introducido por Esther Vera se comenzó discutiendo sobre la efectividad de las prohibiciones del discurso del odio. Para Gavin Phillipson, la efectividad de este tipo de normas es, al menos, dudosa, y su legitimación no debe buscarse por esa vía argumental, sino por la vía de la argumentación moral. Olga Jubany añadió otro aspecto problemático de estas prohibiciones, su contribución a la victimización

de los colectivos protegidos. Sin embargo, sí se mostró partidaria de ciertas prohibiciones para evitar la legitimación y la impunidad de los discursos reiterados que segregan a colectivos concretos y refuerzan el dualismo entre el grupo dominante y los grupos minoritarios, que es absolutamente incompatible con un sistema democrático. Para Eric Heinze, sin embargo, la idea de restringir la democracia para mejorar la democracia carece de sentido. A su juicio, las legislaciones contra el discurso del odio pueden tener cabida en contextos sociales conflictivos, como en India o en Israel, pero asumiendo que se trataría de una cuestión de seguridad, que reduce el nivel democrático del sistema. En relación con la efectividad de estas normas, Heinze puso el ejemplo de los neonazis en Alemania, para recordar que estas medidas dificultan la protección de las víctimas, porque los neonazis desarrollan estrategias para evitar su persecución.